

B: NACIONAL



¿Quién le teme al documento de identidad?

Puede operar en beneficio del Estado, pero también de cada uno de nosotros en una sociedad donde el robo de personalidad es cada vez más frecuente.

En 1977 llegué a Suecia, primero a estudiar sueco en un pequeño poblado llamado Alvesta. Al día siguiente de mi llegada, una joven funcionaria del municipio apareció por la que sería mi casa provisional durante los siguientes tres meses y me dio una cita para que, al otro día, fuera a tomarme una foto para mi documento de identidad. Recuerdo que pregunté cuál era la prisa y me contestó que sin él no podría hacer absolutamente nada. Efectivamente, a las 48 horas de estar allí, ya tenía mi documento de identidad, que es expedido por la oficina central de impuestos y servía para acreditar identidad, edad (en esa época no se vendía alcohol a los menores de 21 años), comprar medicinas en una farmacia, votar (los extranjeros residentes podían, entonces, no sé ahora, sufragar en los comicios locales) y, por supuesto, pagar impuestos. El documento de identidad era un instrumento indispensable para moverse en cualquier lugar de Suecia.

Tiempo después, ya en México, recuerdo que me tocó entrevistar, creo que por primera vez, a **Jorge Alcocer**, entonces representante del Partido Comunista ante la Secretaría de Gobernación. Y el tema fue el documento nacional de identidad, que se quería impulsar desde el gobierno y no lo quería permitir la oposición porque consideraba que sería un instrumento para la

represión. Me pareció, y me parece, un capítulo más de la paranoia nacional. La verdad es que casi todos los países relativamente desarrollados tienen un documento de identidad que resulta cada día más útil en todo tipo de trámites y actividades. Para mi asombro, el anuncio de la Secretaría de Gobernación, entonces en manos priistas, hoy panistas, respecto a la expedición de ese documento, suscita una oposición similar a la de entonces: han pasado casi tres décadas y se sigue diciendo lo mismo, con argumentos tan vacíos como los de entonces.

Hay quienes se preocupan porque el documento será utilizado como un instrumento en políticas de seguridad. Por supuesto que esa es una de sus funciones más importantes. Hoy no sólo no tenemos un padrón completo de la sociedad e, incluso, muchas veces, no existe la certeza del nombre de un detenido o sospechoso o de una víctima. No hace mucho arrestaron en México a un ciudadano español que está acusado de un fraude millonario al Banco Santander, perpetrado años atrás. Este se-

ñor, cuando huyó de España, vino a México y cuenta, en una entrevista con el periódico *El País*, que se instaló en Morelos, allí se inscribió en un torneo de fútbol llanero, le dieron una credencial y con esa identificación terminó sacando una credencial de elector y así vivió, como mexicano, durante años, en nuestro país. Fue detenido porque se confió tanto que fue a solicitar una visa a la embajada de Estados Unidos, donde le tomaron sus huellas y señas personales. Y como la base de datos del gobierno estadounidense sí está actualizada, se le identificó con sus datos reales y se le detuvo cuando pasó a recoger la visa. El caso demuestra la vulnerabilidad de

todo el sistema y la necesidad imprescindible de contar con un documento de identidad moderno y eficiente.

Otros aseguran que la existencia de ese documento tarde o temprano dejaría sin efecto a la credencial de elector y entonces nuevamente los datos electorales quedarían en poder del gobierno. En realidad, la credencial de elector que solemos utilizar para identificarnos, más que con el fin



de votar, es un instrumento a todas luces insuficiente, comenzando por el hecho de que es voluntario empadronarse y sacar ese documento y que, ante la necesidad de cubrir el mayor espectro posible de electores, termina siendo un instrumento relativamente vulnerable pero que, además, en términos de seguridad y control, de cruce con la información fiscal, no sirve absolutamen-

te de nada, empezando por el hecho de que los datos están en manos del Registro Federal de Electores.

El argumento netamente electoral es el más vacío de todos. Cuando se creó la credencial de elector, la idea original era que fuera, como en buena parte del mundo, un documento nacional de identidad. Hubo oposición porque no se quería que esa información estuviera en manos del gobierno y terminamos, como en muchos otros capítulos de la vida nacional, creando un híbrido que se quedó a mitad de camino de todo. Con todo, desde entonces, las cosas han cambiado en forma notable, en el país y en el resto del mundo, comenzando por los sistemas

para tener una capacidad de almacenamiento de datos enorme y por la posibilidad de incorporar, a ese documento de identidad, los datos biométricos de su portador, con el objetivo de hacerlo mucho más difícil de falsificar. Ello puede operar en beneficio del Estado, sin embargo, también de cada uno de nosotros en una sociedad donde el robo de identidades es cada vez más frecuente.

Se pierde, sí, un magnífico negocio para quienes de una u otra forma participan en el Registro Federal de Electores y en la expedición de muchos otros documentos que se utilizan en los ámbitos federal y locales. El costo es altísimo y, el beneficio, parcial: organizar las elecciones pasadas nos costó casi 13 mil millones de pesos. Se argumenta que con ello deberemos portar numerosos documentos: es verdad, pero si se trabaja con seriedad y utilizando los actuales sistemas informáticos, en realidad deberíamos ir concentrando todos esos documentos, como lo viví en aquella lejana experiencia sueca, en uno solo, que deberá servir para identificarse y votar (y todos sa-

bemos que desde hace años las irregularidades que pudieran existir en las elecciones no pasan por las credenciales y el padrón), pero también con el fin de hacer cualquier trámite, pagar impuestos y tener los datos básicos en caso de un accidente. Lo demás es una suerte de paranoia de gente que sigue pensando que somos una sociedad singular que no puede aceptar lo que resulta una norma, en casi todos los países con cierto nivel de desarrollo, desde hace décadas.

Hay quienes se preocupan porque será utilizado como un instrumento en políticas de seguridad.